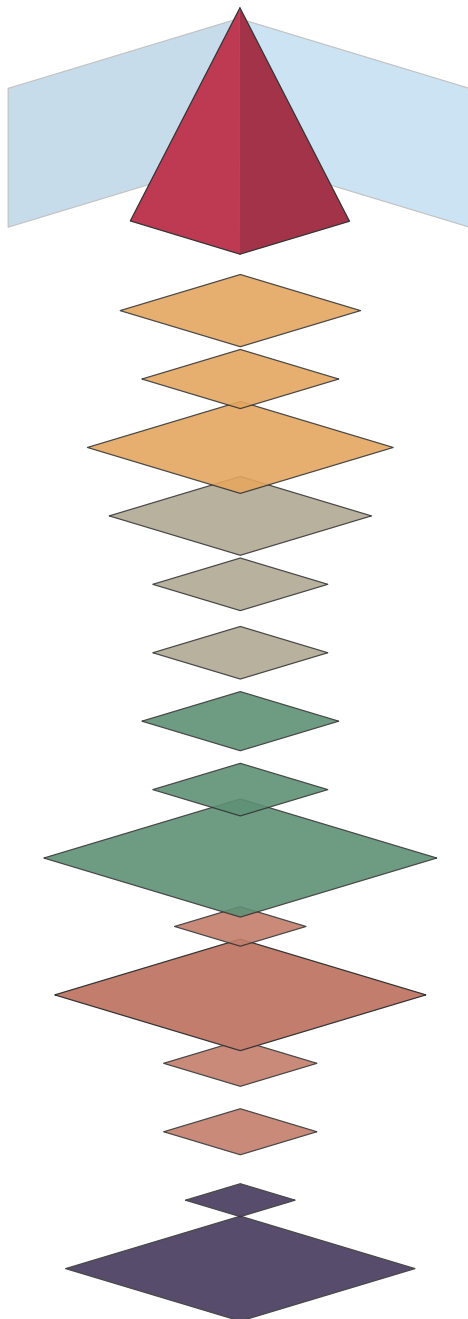
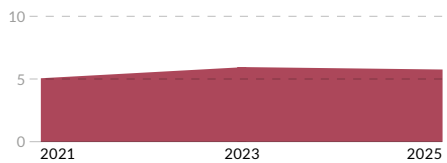


 **GUYANA**



 **5.78** $\searrow 0.19$
PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

65.º de 193 países $\searrow 16$
15.º de 35 países americanos $\searrow 4$
7.º de 12 países de América del Sur -



 **MERCADOS CRIMINALES** **5.17** $\nearrow 0.04$

TRATA DE PERSONAS	5.50	0.00
TRÁFICO DE PERSONAS	4.50	0.00
EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN	7.00	0.00
TRÁFICO DE ARMAS	6.00	0.00
COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS	4.00	0.00
COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES	4.00	0.00
DELITOS CONTRA LA FLORA	4.50	0.00
DELITOS CONTRA LA FAUNA	4.00	$\nearrow 0.50$
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES	9.00	0.00
COMERCIO DE HEROÍNA	3.00	0.00
COMERCIO DE COCAÍNA	8.50	0.00
COMERCIO DE CANNABIS	3.50	0.00
COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS	3.50	0.00
DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA	2.50	$\nearrow 0.50$
DELITOS FINANCIEROS	8.00	$\searrow 0.50$

 **ACTORES CRIMINALES** **6.40** $\searrow 0.40$

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO	4.00	$\searrow 2.00$
REDES CRIMINALES	5.00	0.00
ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO	8.00	0.00
ACTORES EXTRANJEROS	7.00	0.00
ACTORES DEL SECTOR PRIVADO	8.00	0.00



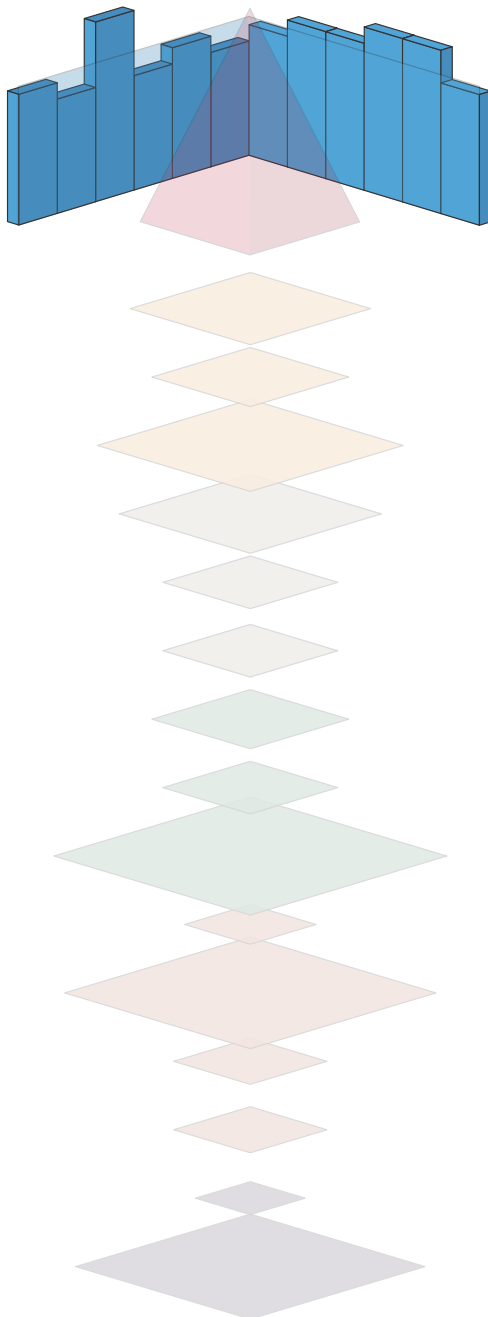
Este proyecto ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos



Funded by the European Union

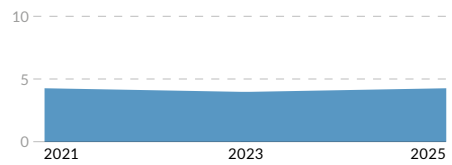
ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

 **GUYANA**



 **4.25** $\nearrow 0.21$
PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

122.º de 193 países $\nearrow 8$
26.º de 35 países americanos $\nearrow 2$
9.º de 12 países de América del Sur -



LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	4.00	0.00
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	3.50	$\nearrow 0.50$
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	5.50	$\nearrow 0.50$
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	3.50	0.00
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	4.00	0.00
CUERPOS DE SEGURIDAD	3.50	$\nearrow 0.50$
INTEGRIDAD TERRITORIAL	4.00	0.00
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	4.50	$\nearrow 0.50$
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	4.50	0.00
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	5.00	0.00
PREVENCIÓN	5.00	$\nearrow 0.50$
ACTORES NO ESTATALES	4.00	0.00



Este proyecto ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos



Funded by
the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Guyana sigue siendo un país tanto de origen como de destino para la trata de personas. Los migrantes, las mujeres, los niños y las comunidades minoritarias son los que corren más riesgos, ya que se los explota en sectores como la minería, la agricultura y los servicios domésticos. La trata de hombres adultos con fines laborales aumentó durante el período que abarca el informe y la mayoría de las víctimas eran extranjeras. La mayoría de los traficantes son hombres guyaneses y también hay venezolanos vinculados a grupos mafiosos conocidos como «sindicatos», que, al parecer, trafican con miembros de la comunidad indígena warao hacia Guyana. Algunos traficantes utilizan las redes sociales para reclutar víctimas para trabajos agrícolas, mineros y de servicios. Las rutas de la trata suelen conectar Guyana con Estados Unidos y con otros países americanos, como Brasil, Cuba, Haití, Surinam y Venezuela.

Guyana, un país de tránsito debido a la porosidad de sus fronteras, se enfrenta a un mercado consolidado de tráfico de personas que afecta principalmente a ciudadanos venezolanos y haitianos. Según los informes, el tráfico de venezolanos hacia el país sigue sin estar suficientemente documentado, lo que dificulta la eficacia de las intervenciones. Guyana también ha experimentado una afluencia de haitianos, en virtud de los acuerdos de la Comunidad del Caribe (CARICOM), por lo que resulta complicado distinguir entre las entradas legales y las ilegales.

Guyana alberga un importante mercado de extorsión, que se concentra a lo largo del río Cuyuni, debido a su proximidad a la disputada región de Essequibo, que Venezuela reclama. Dominan la zona los grupos delictivos, como los soldados, los sindicatos y las bandas guerrilleras venezolanos. Algunos elementos criminales venezolanos suelen confiscar u obtener mercancías como combustible, productos básicos, dinero y oro, en calidad de «impuestos», en los puestos de control fluviales. Esta actividad extorsiva es considerable y la favorecen la dinámica transfronteriza y el controvertido estatus territorial, que convierten la zona en un punto focal para la explotación criminal y la generación de ingresos ilícitos.

TRÁFICO

Guyana funciona como un lugar de tránsito para el tráfico de armas, que proceden principalmente de Brasil y de Estados Unidos. Las fronteras del país con Brasil y con Venezuela, en gran parte no reguladas, dificultan aún más la detección. A pesar de la reciente disminución interanual de las incautaciones de armas, no hay indicios de que se

haya reducido la circulación de armas de fuego ilegales en el país. Algunos grupos armados organizados extranjeros, procedentes, sobre todo, de Venezuela, Brasil y Estados Unidos, colaboran con las bandas locales para facilitar el tránsito y el uso de armas. Que Guyana se considere un país de alto riesgo en cuanto al tráfico de armas ha hecho que Estados Unidos endureciera las normas de exportación. Sin embargo, la CARICOM critica el flujo constante de armas de fuego ilegales y ha pedido a Estados Unidos que intervenga con más firmeza.

El mercado de productos falsificados de Guyana, que abarca artículos para el hogar, cosméticos, medicamentos y productos electrónicos, tanto en línea como en persona, sigue siendo notable y poco denunciado. A pesar de la ausencia de datos concretos sobre el tamaño y el valor del mercado, a menudo se han identificado artículos falsificados, cuya proliferación supone un problema cada vez mayor para el sector privado, que carece de la capacidad necesaria para abordarlo con eficacia.

Guyana funciona como país de destino y de tránsito de productos ilícitos sujetos a impuestos especiales, en particular tabaco y alcohol, aunque faltan datos sobre la frecuencia y el volumen de este comercio. Si bien el mercado ilícito de cigarrillos se ha expandido, su impacto económico no es sustancial. Sin embargo, este aumento pone de relieve los retos económicos que plantea el contrabando y sugiere un aumento de las actividades del tráfico transfronterizo. Es probable que la dinámica regional externa contribuya al flujo de productos ilícitos, lo que complica la aplicación de la ley y la protección de las ganancias.

MEDIOAMBIENTE

Guyana sigue estando relativamente protegida de la deforestación, en comparación con los países vecinos, pero se enfrenta a mayores amenazas, por la tala ilegal. Las maderas duras de gran valor, como el chlorocardium y el peltogyne, son muy codiciadas y casi un tercio de la madera talada procede de fuentes ilegales, que responden a la demanda extranjera. La reciente expansión económica impulsada por el petróleo ha intensificado la tala de bosques y ha hecho que el Gobierno no preste tanta atención a la conservación forestal, mientras que los insuficientes sistemas de verificación permiten que la madera talada ilegalmente se infiltre en los mercados nacionales e internacionales, lo que perjudica a las comunidades locales y la explotación forestal legítima.

Guyana tiene un comercio ilícito de especies silvestres afianzado, aunque a pequeña escala, facilitado por su distribución territorial. El país funciona sobre todo como un lugar de origen del tráfico de especies silvestres y se contrabandean especies como loros, guacamayos, reptiles y jaguares a destinos como

México, Estados Unidos y Singapur. También es frecuente la caza furtiva de tapires, jaguares y agutíes. Las ambigüedades del marco jurídico que regula el comercio de carne de caza y las exportaciones de especies silvestres difuminan la distinción entre las actividades legales y las ilegales. Guyana también es muy vulnerable a la pesca ilegal, especialmente de arapaima. Hay factores regionales que influyen en la pesca ilícita, en la que suelen participar delincuentes extranjeros.

Guyana funciona como país tanto de origen como de tránsito para el tráfico ilícito de oro y de mercurio, impulsado por una combinación de operaciones mineras legales e ilegales, así como por unas prácticas mal reguladas del comercio del oro. Los casos recientes en los que algunos funcionarios públicos y miembros de las élites financieras han participado en el comercio ilícito del oro ponen de relieve lo arraigado que está este mercado y los fuertes vínculos que tiene con la corrupción. Aunque no es un destino principal para el oro venezolano, Guyana forma parte de las rutas de contrabando hacia Europa y es frecuente el tránsito a través de Panamá o de Surinam. Tras la introducción de restricciones a la minería artesanal del oro en determinados territorios brasileños, en particular los habitados por comunidades indígenas, se supone que miles de mineros han cruzado la frontera con la vecina Guyana para continuar con la minería, especialmente en la región de la montaña Marudí y en otras zonas cercanas a la frontera. También se tiene constancia del contrabando transfronterizo de oro entre Guyana y Brasil, con flujos en ambas direcciones. También se ha denunciado que algunas organizaciones criminales extranjeras contrabandean mercurio a Guyana, supuestamente para usarlo en operaciones mineras ilícitas, mientras que se cree que algunas entidades locales exportan mercurio a otras partes del Caribe. La disminución de las importaciones legales de mercurio ha contribuido aún más al crecimiento del comercio ilícito de este metal. Mientras tanto, el rápido crecimiento del sector petrolero del país ha atraído a cada vez más inversores, por lo cual preocupa su vulnerabilidad al lavado de dinero y a otras conductas financieras indebidas.

DROGAS

Persiste en Guyana el tráfico de heroína y el país sirve como mercado tanto de tránsito como de consumo. Del aumento de las reservas de heroína y del consumo interno se deduce que las rutas establecidas para el contrabando de cocaína se están reutilizando para la heroína, que pasa principalmente por Venezuela y por Brasil, antes de llegar a Surinam, para su posterior reexpedición a Europa y a Estados Unidos. A pesar de este crecimiento, las incautaciones de heroína siguen siendo mínimas.

Guyana todavía es un importante centro de tránsito de cocaína, que aprovecha su posición estratégica en la cuenca del Amazonas. La cocaína producida en Colombia se suele introducir de contrabando en Guyana a través de Venezuela y luego continúa hacia Surinam y los territorios franceses, antes de llegar a Europa y a otros destinos. En los últimos años han

aumentado de forma sustancial las incautaciones de cocaína, incluida una sin precedentes de 4,4 toneladas en una pista de aterrizaje ilegal cerca de la frontera con Venezuela. El alijo puso de relieve el papel que sigue desempeñando Guyana como país de tránsito y también el uso constante que hacen los narcotraficantes de pistas de aterrizaje ilegales en todo el país. El tráfico de drogas está estrechamente relacionado con los delitos financieros, en particular el lavado de dinero, mientras que otros delitos, como la evasión fiscal y la trata de personas, también contribuyen al panorama delictivo.

Además, el país es un lugar de tránsito para el contrabando de cannabis, debido a la porosidad de sus fronteras y a que tiene acceso al transporte marítimo internacional. El tráfico de cannabis ha aumentado y los cuerpos de seguridad han informado de múltiples incautaciones y del descubrimiento de plantaciones de cannabis, lo que indica que se trata de un cultivo establecido. Las autoridades también se han visto implicadas en el mercado y se ha arrestado a personal militar y policial por posesión de cannabis durante operaciones de inteligencia. Persiste la ambigüedad en el mercado, ya que la posesión personal limitada está despenalizada y la producción de cáñamo es legal con licencia, por lo que cuesta distinguir las actividades ilícitas de las legales. No obstante, el mercado del cannabis sigue siendo relativamente pequeño en comparación con otros países de la región.

El mercado de drogas sintéticas de Guyana sigue siendo limitado y el comercio y el tráfico ilícitos se producen principalmente a través de las fronteras con Surinam y con Brasil, con la colaboración de redes criminales tanto locales como extranjeras. Las incautaciones recientes incluyen éxtasis y metanfetamina y, según los informes, ha aumentado el consumo de drogas sintéticas en la población escolar.

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

Guyana ha experimentado un aumento de los delitos dependientes de la cibernética, como los ataques de ransomware y las infecciones de malware, lo que refleja la creciente vulnerabilidad de su infraestructura digital en plena expansión económica. A pesar del aumento de los riesgos, las denuncias de ciberataques siguen siendo limitadas.

DELITOS FINANCIEROS

Guyana tiene un mercado consolidado de delitos financieros en el que participan actores tanto privados como públicos y destacan los esquemas Ponzi y los fraudes en la contratación pública y en las transferencias electrónicas. La unidad de inteligencia financiera informó de que el fraude sigue siendo generalizado en el país, sobre todo de tipo financiero, amoroso y general. Las víctimas de un esquema Ponzi que ya se ha descubierto siguen denunciando el caso y hay indicios de que otros actores podrían haber asumido el control del esquema. También se han identificado nuevas tipologías, como las estafas que comprometen el correo electrónico

empresarial, dirigidas al sector privado, incluido un caso en el que, según se informa, una empresa de petróleo y de gas perdió millones, debido al compromiso del correo electrónico empresarial y a transferencias bancarias fraudulentas. Los delitos financieros suelen estar relacionados con factores tanto nacionales como internacionales, como las actividades financieras transfronterizas y la participación de instituciones financieras internacionales. La corrupción pública relacionada con los delitos financieros no se suele denunciar y a menudo se topa con la indiferencia de las autoridades.

ACTORES CRIMINALES

En Guyana, el crimen organizado se caracteriza por unas redes criminales fluidas y descentralizadas que se dedican al tráfico de drogas, de personas, de armas y de especies silvestres y a la minería ilícita. Estas redes, que cuentan con el apoyo de funcionarios corruptos y de actores de alto nivel, a menudo colaboran con grupos extranjeros de Venezuela, Surinam y Brasil y utilizan las rutas transnacionales de contrabando. La incapacidad del Estado para hacer cumplir las leyes en las regiones fronterizas permite el predominio de los delincuentes, en particular en el tráfico de drogas y la minería ilícita. Si bien estos grupos por lo general procuran no llamar la atención ni recurrir a la violencia, existen algunas excepciones, especialmente en las zonas fronterizas. Estas bandas locales carecen de identidades, códigos o rituales claros y se forman en torno a un líder local, con unos pocos subordinados. Por consiguiente, las afiliaciones y las alianzas cambian a menudo. Se dedican a delitos comunes, como el robo y los delitos oportunistas, al tráfico de drogas y de armas a pequeña escala y al microtráfico y en ocasiones brindan apoyo a organizaciones más grandes, proporcionándoles seguridad para sus envíos o transportando drogas a nivel local. Hay algunas pruebas de la presencia de grupos nacionales de tipo mafioso. No obstante, al parecer, los jefes criminales de Guyana se han involucrado en política, lo que pone de manifiesto la penetración del crimen organizado en el país. Además, las mafias organizadas vinculadas a negocios aparentemente legales, en particular la minería del oro, facilitan su contrabando y arriendan concesiones a mineros ilegales e informales que eluden la normativa.

Los actores integrados en el Estado desempeñan un papel importante en los mercados criminales de Guyana, donde la corrupción impregna todos los niveles del Gobierno. Los funcionarios suelen recibir sobornos o regalos por hacer la vista gorda a las actividades ilegales, lo que permite las operaciones criminales. Los partidos políticos siempre se han alineado con bandas criminales, como las bandas fantasma indoguyanesas y las afguyanesas, para instigar el descontento. Los inversionistas criminales, como los que están involucrados en el tráfico de drogas y en la minería del oro, han financiado campañas políticas de todos los partidos y fomentan la corrupción y el tráfico de influencias. La corrupción sistémica del país debilita la gobernanza y perpetúa el crimen organizado.

Las redes criminales extranjeras influyen significativamente en el panorama del crimen organizado de Guyana y hay actores procedentes de México, Italia y Colombia que ocupan puestos de liderazgo en el tráfico de cocaína, de fauna, de armas y de heroína. Estas entidades extranjeras colaboran con actores estatales y con bandas locales y dan forma a las economías ilícitas. Algunos grupos venezolanos, como los sindicatos y los actores estatales corruptos, pertenecientes a instituciones como la Guardia Nacional Venezolana, llevan a cabo incursiones transfronterizas, extorsiones y trata de personas y a menudo explotan zonas mineras ilegales. También hay redes brasileñas y surinamesas en las regiones fronterizas. En la costa opera la mafia italiana, vinculada, sobre todo, al tráfico de drogas hacia el sur de Italia, y el descubrimiento de un fugitivo asociado a la 'Ndrangheta pone de relieve las conexiones transnacionales. Estas interacciones demuestran la convergencia de actores extranjeros y locales, lo que agrava las vulnerabilidades del panorama criminal del país.

Las empresas mineras, forestales y agrícolas del sector privado del país contribuyen a la trata y el tráfico de personas, porque buscan mano de obra explotada, como mineros y trabajadores sexuales. Las redes criminales están vinculadas a empresas legales, como las compañías mineras de oro, que facilitan su contrabando y otorgan concesiones mineras a operadores ilegales que eluden la supervisión del Gobierno. Además, existe una creciente preocupación por la llegada de inversores al sector petrolero que podrían participar en actividades de lavado de dinero. Las vulnerabilidades sistémicas, como las lagunas normativas y la corrupción, permiten estas actividades. La dinámica delictiva se caracteriza por la compleja interacción entre los sectores económicos legítimos y el crimen organizado, lo que debilita la gobernanza y la integridad económica del país.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

En Guyana, el poder político está muy centralizado en el Poder Ejecutivo, lo que consolida el predominio de un solo partido, marcado por divisiones etnopolíticas, y fomenta la desconfianza y la polarización, especialmente debido al aumento de los ingresos procedentes del petróleo y el gas. Aunque las elecciones del 2020 se consideraron en general libres y justas, las denuncias de interferencias por parte de los funcionarios electorales dieron lugar a una comisión presidencial de investigación que confirmó los intentos de manipular el recuento de votos. Se produjeron destituciones, pero la confianza de la población siguió siendo escasa. Además, la comunidad internacional destacó las deficiencias de la dirigencia política de Guyana, después de que varios casos de corrupción a nivel estatal revelaran que el crimen organizado se había infiltrado en el sistema político. En respuesta, el Gobierno adoptó una retórica política centrada en la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, la aplicación de esas nuevas políticas y leyes sigue siendo deficiente.

La corrupción sigue siendo un problema generalizado en Guyana, alimentado por una política basada en criterios étnicos que da prioridad a los intereses de las élites. Entre las medidas recientes para combatir la corrupción figuran el refuerzo de los protocolos contra el lavado de dinero y la mejora de la auditoría de las empresas estatales. No obstante, persisten los delitos financieros en los que están implicados funcionarios públicos, lo que debilita la credibilidad. Los ingresos procedentes del petróleo y el gas aumentan la urgencia de llevar a cabo reformas más sólidas. La adhesión del país a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas tiene por objeto mejorar la transparencia del sector, pero se podría suspender, porque persisten los incumplimientos en la presentación de los informes y los resultados de las auditorías. La falta de datos actualizados sobre las reservas de petróleo y la aparente opacidad en la gestión de los ingresos procedentes del petróleo han intensificado el descontento de la población, lo que ha dado lugar a llamamientos para mejorar la transparencia y para lograr una gestión más equitativa de los recursos.

Guyana ha ratificado tratados internacionales de lucha contra el tráfico de drogas, el comercio ilícito de armas y los delitos contra las especies silvestres y ha firmado acuerdos de cooperación con los países vecinos y con socios importantes, como Estados Unidos, el Reino Unido y China. En el marco de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe, Guyana reforzó las medidas para controlar las drogas y recibió asistencia financiera bilateral. El país también ha seguido fomentando la cooperación con los socios de la CARICOM, como el intercambio de información sobre el tráfico de armas de fuego y la ciberseguridad. Se ampliaron los esfuerzos en materia de ciberseguridad, con la colaboración de Estados Unidos para proteger las redes

militares. También ha aumentado la cooperación regional en materia de protección del medio ambiente y ha firmado un acuerdo con la Unión Europea para hacer frente a la tala ilegal. Otros diálogos entre la UE y Guyana se han centrado en la colaboración económica, de seguridad y medioambiental, con el apoyo de la UE para resolver las disputas territoriales.

Guyana ha establecido un marco jurídico integral para combatir el crimen organizado, que aborda el tráfico de drogas, el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, el tráfico de armas, la ciberdelincuencia y el tráfico de especies silvestres. Las políticas nacionales también regulan la extracción de oro, mediante la supervisión de las licencias y del procesamiento, la restricción de la posesión de oro en bruto a los productores y la obligación de vender su oro a instituciones autorizadas en un plazo determinado. Las reformas previstas de la Ley de Armas de Fuego pretenden reforzar la verificación de los antecedentes y aumentar los criterios para la concesión de licencias. También se están revisando las sanciones por la posesión, la producción y el comercio de armas ilegales. A pesar de la existencia de marcos normativos, su aplicación sigue siendo bastante ineficaz.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

Aunque la Constitución garantiza su independencia, el Poder Judicial de Guyana se enfrenta a retos importantes. Las divisiones políticas basadas en el origen étnico debilitan el Poder Judicial y las disputas políticas y la falta de personal y de recursos afectan el funcionamiento de los tribunales. Las sucesivas administraciones han nombrado a aliados cercanos para los tribunales superiores, lo que compromete la imparcialidad judicial. El presidente necesita la aprobación de la oposición para nombrar a los altos cargos, pero estos nombramientos también son controvertidos. Durante el período que abarca el informe, los dos cargos más altos han sido ocupados por interinos. Los tribunales no pueden dictar sentencias efectivas contra los actores criminales, con lo cual hay menos condenas. Estas ineficiencias jurídicas también dan lugar a arrestos preventivos prolongados y a prisiones superpobladas y con condiciones sanitarias inadecuadas y a que persistan la corrupción de los funcionarios y el contrabando descontrolado.

El marco de los cuerpos de seguridad de Guyana comprende unidades especializadas que se ocupan del crimen organizado, como la trata de personas, el control de las drogas, los delitos financieros y la ciberseguridad. Aunque ha mostrado cierta eficacia, sus esfuerzos se ven limitados por la corrupción persistente entre los funcionarios. Sin embargo, la capacidad para hacer cumplir la ley se ha visto reforzada por una financiación significativa, por las iniciativas de participación

comunitaria y por una amplia capacitación policial y se han hecho esfuerzos para mejorar la transparencia, mediante el uso de cámaras corporales.

Las fronteras porosas del país facilitan las actividades delictivas, como el tráfico de cocaína, oro, mercurio y armas de fuego y la trata de personas, especialmente en las regiones del interior, donde los cuerpos de seguridad están limitados. En contraste con la densa población costera, la escasa densidad demográfica del interior aumenta su vulnerabilidad a las operaciones ilícitas. Persisten las tensiones en la región de Essequibo, rica en petróleo y en minerales, donde Venezuela reivindica sus derechos territoriales, a pesar de una orden de la Corte Internacional de Justicia. El descubrimiento de petróleo en aguas guyanesas ha intensificado la disputa, enmarcada en el enfoque estratégico de Venezuela para controlar recursos, debido a sus problemas económicos. Algunos actores internacionales, como Estados Unidos y Brasil, manifiestan su preocupación, mientras que la CARICOM media sin éxito. La postura militar continúa y hace temer una escalada.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Guyana sigue siendo una jurisdicción de riesgo medio-alto para el lavado de dinero, debido principalmente a la corrupción y el soborno. De todos modos, el país ha reforzado su marco jurídico para combatir los delitos financieros y ha aplicado leyes nuevas y ha enmendado otras para luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Durante el período que abarca el informe, las autoridades han mejorado la información financiera, han aumentado la capacidad de incautación de activos y han subsanado deficiencias anteriores. La colaboración con las unidades regionales ha mejorado, gracias a los acuerdos formales de intercambio de información, mientras que las iniciativas de formación han reforzado la capacidad para recuperar activos. Algunos factores externos, como el descubrimiento de importantes reservas de petróleo y de gas, plantean nuevos riesgos de lavado de dinero. Es necesario seguir trabajando para garantizar la eficacia de las medidas recientes, cuyo impacto aún no se ha determinado.

A pesar de la importante expansión económica, debida a los ingresos del petróleo, se prevé que el crecimiento de Guyana se desacelere, como consecuencia de la caída de los precios del crudo. El Gobierno está promoviendo activamente la diversificación económica para reducir la dependencia de productos como el oro, la bauxita, el arroz y el azúcar. Los marcos jurídicos y normativos se ajustan a las normas internacionales, pero los retos burocráticos y la opacidad de los procedimientos obstaculizan la eficiencia comercial. Persisten la corrupción y la ineficiencia, sobre todo en la contratación pública, donde las licitaciones adolecen de falta de transparencia y los contratos suelen llevar sobrepagas. Las transacciones financieras siguen dependiendo del efectivo, especialmente en las zonas rurales, lo que limita la penetración de los servicios bancarios.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

El Estado apoya activamente a las víctimas de la trata de personas y cumple las normas internacionales contra la trata. Guyana cuenta con mecanismos para proporcionar asistencia integral a las víctimas de la trata de personas, que incluyen alojamiento, atención médica, asesoramiento, asistencia jurídica, formación profesional y apoyo para la reinserción o la repatriación. Sin embargo, los limitados servicios de interpretación dificultan la accesibilidad. El Gobierno ha financiado múltiples refugios, tanto estatales como gestionados por oenegés, y ha asignado recursos financieros para el apoyo a las víctimas, aunque se ha observado una disminución presupuestaria y una falta general de voluntad por parte del Gobierno. Se sigue tratando de estandarizar los procedimientos para identificar a las víctimas, como las disposiciones relativas a los niños, en colaboración con socios internacionales. En Guyana, las campañas de educación pública, especialmente en las comunidades indígenas, y la ampliación de los servicios psicosociales y de tratamiento prestan apoyo a los consumidores de drogas. En el 2024, el Gobierno puso en marcha un Plan de Acción Nacional de Salud Mental para mejorar la atención de la salud mental y para abordar la drogadicción en el marco de la salud pública. La estrategia nacional contra las drogas hace hincapié en un enfoque basado en los derechos humanos y da prioridad a reducir los daños, a tratamientos basados en evidencias y a la inclusión social, pero la escasa evaluación y la falta de financiación hacen dudar de que estos esfuerzos vayan a tener repercusiones a largo plazo. Al mismo tiempo, existen programas de protección de testigos, pero siguen siendo ineficaces, debido a los persistentes retos y al estancamiento de su aplicación.

Guyana también ha logrado avances significativos en la lucha contra la delincuencia, sobre todo mediante la aplicación de estrategias nacionales globales. Se elaboró un plan maestro nacional para luchar contra las drogas, centrado en reducir su oferta y su demanda. Las campañas de sensibilización pública hicieron hincapié en la prevención de la ciberdelincuencia. La trata de personas siguió siendo una prioridad, aumentaron las medidas de control y se establecieron oficinas de inmigración en puntos fronterizos claves, que ofrecen líneas telefónicas de atención multilingües. El Gobierno consiguió la participación activa de las comunidades indígenas y las sectoriales para mejorar la sensibilización y la denuncia. Los índices de criminalidad disminuyeron notablemente y los homicidios, los robos y la trata de personas alcanzaron los niveles más bajos de la última década.

En Guyana, los medios de comunicación están algo restringidos y, aunque la libertad de prensa en general se respeta, suele ser objeto de intimidación y acoso, sobre todo los periodistas críticos con las autoridades. Los funcionarios públicos han presentado denuncias por difamación, que es punible con penas de prisión. Se han denunciado casos de violencia contra periodistas y hasta un intento de asesinato. Los grupos de la sociedad civil han expresado su preocupación, porque el Gobierno trata de reprimir a los medios de comunicación

críticos y de restringir su acceso a las ruedas de prensa. Además, la contratación de periodistas por parte de empresas petroleras y entidades públicas ha coincidido con una disminución de la información crítica en esos sectores. Las ONGs operan con libertad y se las consulta sobre iniciativas políticas, como las medidas contra la trata de personas. No obstante, algunas organizaciones de la sociedad civil del país se están enfrentando a cada vez más actos de intimidación, lo que ha reducido el espacio cívico.

Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.